



Valledupar, Veintiuno (21) de septiembre del año dos mil Veintidós (2022).

Referencia: ACCION DE TUTELA.

Accionante: JORGE ENRIQUE CHOPERENA TORRES

Accionado: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTIN CODAZZI

Rad. 20001-41-89-002-2022-00622-00

Providencia: FALLO DE TUTELA

Procede el Juzgado a dictar el fallo correspondiente en la acción de tutela referenciada. En la cual se relacionan los siguientes:

I. HECHOS:¹

PRIMERO: que yo el día 26 de mayo del 2022 presenté un derecho de petición debido que Al revisar en las páginas virtuales SIMIT Y RUTN, encuentro que en la SECRETARIA DE TRANSITO se reportó y público con mi número de cedula UN COMPARENDO N. 425-13 DEL 19/04/2013, COMPARENDO N. 0000000003937 DEL 06/11/2018, COMPARENDO N. 0000000005798 DEL 14/11/2018, COMPARENDO N. 0000000000067 DEL 06/11/2018, COMPARENDO N. 0000000007678 DEL 21/08/2018, COMPARENDO N. 0000000011315 DEL 10/12/2018 EN DONDE ESTOS COMPARENDOS YA ESTAN PRESCRITOS, ADEMÁS QUE QUE NO ESTAN EN COBRO COACTIVO PERDIERON FUEZA EJECUTORIA POR ENCONTRARSE PRESCRITOS CONFORME AL ARTICULO 817, y 818 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO se encuentran prescripto , perdieron fuerza ejecutoria, hubo decaimiento del acto administrativo conforme al artículo 91 numeral 3 de la ley 1437 del 2011 que establecen: Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. De igual forma el artículo 159 del código nacional de tránsito establece que los comparendo prescriben a los tres años, al igual que los mandamiento de pagos también hay prescripción, por lo que el único mecanismo que poseo para que dejen sin efecto estas foto multas, es la acción de cumplimiento y no es procedente , la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debido que esta acción caduco , debido que esta acción caduca a los cuatro meses, ,donde esa foto no es ningún medio de prueba , por lo que la secretaria de transito debe de anular dichas foto multa.

SEGUNDO. Sin embargo, la secretaria de transito DE AGUSTIN CODAZZI, a la fecha No responde ni resuelve de fondo lo pedido o solicitado aclarando de manera clara y precisa las fechas en la que se adelantó todo lo entramado y piezas procesales que integran dicho proceso coactivo, donde el proceso de cobro coactivo se adelantó a mis espaldas violando mis derechos fundamentales a la presunción de inocencia y contradicción y a la vez desconociendo que no puede haber sanción en firme sin darse a conocer al procesado para que este haga usos de sus recursos y se defienda a través de la oponibilidad, es evidente que los términos para responder o dar respuesta se vencieron, los cuales están señalados en la ley de 10 a 15 días hábiles, Es por eso señor Juez, que acudo a este mecanismo sumario para que ante usted ordene a pronunciarse a dicha secretaria de tránsito y transporte de AGUSTIN CODAZZI sobre las peticiones hechas por el accionante en el escrito o requerimiento de cumplimiento.

TERCERO: De igual forma solicito se revoquen los comparendos registrados a mi nombre y número de cedula, debido que en ningún momento me notificaron el proceso de cobro coactivo que se levantó en mi contra, es decir se violó el debido proceso presunción de inocencia, habeas data, y hasta el día de hoy no me han dado respuesta alguna violándome el derecho de petición consagrado el artículo 23 de la constitución y la ley 1755 del 2015, además esto es un cobro irracional sumando los intereses que me está afectando seriamente, causándome daños y perjuicios.

CUARTO: La secretaria de transito accionada amenaza con embargar mi cuenta donde esto podría ser un perjuicio mayor debido que es la única entrada que tengo para mantenerme a mí y a mi familia, por lo que pido también, señor juez, que ordene a dicha entidad que no me embargue mi cuenta.

II. ACTUACIÓN PROCESAL:

¹ Texto tomado taxativamente de la acción de tutela



El despacho al estudiar la demanda de tutela de referencia por venir en forma legal la demanda de tutela fue admitida mediante auto de fecha catorce (14) de septiembre de Dos mil Veintidós (2022), notificándose a las partes sobre su admisión, y solicitando respuesta de los hechos presentados por el accionante a la parte accionada.

III. CONTESTACION DE LA ACCIONADA²

La parte accionada **SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTIN** contestó la presente acción de tutela de la siguiente manera:

Manifestó haber dado respuesta al derecho de petición presentado por la entidad accionada, solicitando el archivo de la acción de tutela toda vez se configura un hecho superado.

IV. PRETENSIONES:³

PRIMERO. Que mi caso sea revisado a profundidad y detalle, para que den una respuesta efectiva, concisa y detallada, donde aclare en la respuesta todo el proceso adelantado en mi contra, y que me sea aprobada la prescripción de los comparendos en referencia por pérdida de fuerza ejecutoria al generarse el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción de cobro por no haberse notificado por los medios establecidos en la ley.

SEGUNDO: Que se ordene a la secretaria de tránsito y transporte, descargar de las paginas virtuales de consulta SIMIT y RUNT todos los datos personales que se hayan reportado y publicado, porque la permanencia de estos en dichas bases afecta mi buen nombre, la moral por no existir fundamentos de hecho y de derecho que permitan legalmente la permanencia de esta información que no es veraz.

TERCERO. Que se abstengan de embargar mi cuenta de ahorros o nomina, debido que es la única entrada que tengo para la manutención mía y de mi familia, pago de arriendos, alimento y servicio o de iniciar otro tipo de acción legal con fundamento de estos comparendos.

V. DERECHO FUNDAMENTAL TUTELADO:

El accionante considera que, con los anteriores hechos se está vulnerando su derecho fundamental al DERECHO DE PETICIÓN.

VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

La acción de tutela se ha dicho en reiteradas oportunidades está consagrada en el Art. 86 de la Constitución Política Nacional, como un instrumento jurídico al alcance de cualquier persona, con el cual puede obtener la protección específica e inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o violados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en aquellos casos autorizados por la ley.

6.1. REGULACION LEGAL DEL DERECHO DE PETICION.

El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, es un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades, organizaciones privadas que establezca la ley, con miras a obtener pronta resolución a una solicitud o queja.

A diferencia de los términos y procedimientos jurisdiccionales, el derecho de petición es una vía expedita de acceso directo a las autoridades. Aunque su objeto no incluye el derecho a obtener una Resolución determinada, sí exige que exista un pronunciamiento oportuno.

Cuando se hace una petición a las entidades públicas o privadas y estas no la responden dentro del término legalmente establecido en la norma, es motivo para instar a la entidad a dar solución inmediata a la petición, a través de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de nuestra Carta Política, siendo esta un instrumento jurídico al alcance de cualquier persona, con la cual se puede obtener la protección específica e inmediata de los derechos

² Tomado textualmente de la contestación de la entidad accionada

³ Tomado textualmente de la demanda



fundamentales, cuando estos resulten amenazados o violados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en aquellos casos autorizados por la Ley.

A si las cosas, tenemos que, de las circunstancias obrantes en el expediente, se puede colegir que el accionante pretende se tutele en su favor por violación al derecho de petición, regulado por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, teniendo en cuenta que la accionada dio respuesta oportuna a su petición.

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho de petición al igual que los demás derechos constitucionales no tienen “per se” el carácter de absolutos, pues cuentan con los límites previstos por los derechos de los demás y el orden jurídico.

Es un deber de todo ciudadano respetar los derechos de los demás y no abusar de los propios, son principios intrínsecos que van inmersos en el actuar de todos los ciudadanos colombianos, pero en especial de los funcionarios públicos.

En términos generales, puede decirse que el derecho de petición, se establece legal y constitucionalmente a favor de todas las personas. Cabe resaltar que, para la efectividad del mismo, quien hace uso de este medio, debe cumplir además de las exigencias establecidas en la norma que le da vida jurídica al mismo, la Constitución Política de Colombia, con los requisitos formales establecidos en la ley 1755 de 2015.

Por tanto, tenemos en primer lugar, como característica primordial que la petición debe ser respetuosa, puesto que si no lo fuere y se incumple con este requisito se exime de la obligación de responder a quien se invoca, por incumplimiento de las condiciones del artículo 23 de la Constitución Política.

En segundo lugar, el derecho de petición puede ser: por interés general, por interés particular, por petición de informaciones, o por consultas.

Cuando se trata de información, esta debe ser veraz e imparcial e inalterada, y puede ser general: acceso a documentos sobre el origen, estructura, funcionamiento, naturaleza, procedimientos etc. y particular: información que se produzca por el ejercicio de sus funciones o que repose en la entidad, exceptuándose el caso de los documentos sometidos a reserva por disposición de la ley o la Constitución Nacional.

Adicionalmente a lo anterior, tenemos que en los apartes de la norma citada se establece los términos en que deben resolverse las peticiones, las cuales serán atendidas de la siguiente manera:

“Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”



6.2. PROBLEMA JURÍDICO:

Corresponde al Juzgado determinar si la entidad accionada SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTIN, ha vulnerado el derecho fundamental de petición del señor JORGE ENRIQUE CHOPERENA TORRES.

6.3. DEL CASO EN CONCRETO

Descendiendo a el sub exánime, observa este Despacho que el accionante manifiesta haber presentado un derecho de petición ante la entidad accionada SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTIN el día veintiséis (26) de mayo de 2022, en la cual solicitaba la prescripción de la ejecución o acciones respecto de las sanciones y/o multas derivadas de las ordenes de comparendo

En consecuencia, le corrió traslado a la accionada SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTIN, quienes manifestaron haber dado respuesta a la petición realizada por el señor JORGE ENRIQUE CHOPERENA TORRES, el ocho (01) de agosto de 2022, la cual fue notificada al correo electrónico aportado por el peticionario.

En ese sentido, la respuesta de la entidad accionada a la petición del señor JORGE ENRIQUE CHOPERENA TORRES, en donde anexan la resolución No. 380 del 16/09/2022 accediendo a las peticiones efectuadas por el accionante y decretando la solicitud de prescripción,

En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C- 418 de 2017 reiteró que el ejercicio del derecho de petición se rige por las siguientes reglas y elementos de aplicación:

- “1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.*
- 2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.*
- 3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.*
- 4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita. (...)”*

Para el caso en concreto, la entidad accionada SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTIN CODAZZI con su respuesta resolvió de fondo el asunto solicitado.

Lo que demuestra que, durante el trámite de la presente acción, la accionada hizo cesar las causas que dieron origen a la presente demanda de tutela, al dar una respuesta, clara, congruente y de fondo a lo solicitado por el peticionario, según los documentos anexado en la contestación de la presente acción constitucional. Respecto a la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte Constitucional se pronunció en Sentencia T- 021 del 20 de febrero de 2017, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, y ha señalado que esta se presenta en la acción de tutela cuando frente a la solicitud de amparo del actor, la orden del Juez de tutela carece de efectos, precisando que la misma acontece cuando se está ante un daño consumado o ante un hecho superado.

En esa sentencia textualmente dijo el máximo tribunal constitucional:



“La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o caería en el vacío. Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado.

En cuanto al daño consumado, la jurisprudencia ha admitido que el mismo tiene ocurrencia cuando la amenaza o la transgresión del derecho fundamental ya ha generado el perjuicio que se pretendía evitar con el mecanismo preferente de la tutela, de manera que resulta inocuo para el juez impartir una orden en cualquier sentido. Así las cosas, el daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete un peligro y, por ello, tan sólo es procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del derecho. En este escenario, esto es, con el fin de obtener una reparación económica, entiende la Corte que la acción de tutela resulta—por regla general— improcedente, pues su naturaleza es eminentemente preventiva y no indemnizatoria. De manera que, en relación con este fenómeno, los jueces de instancia y la propia Corte deben declarar la improcedencia de la acción, a menos que —bajo ciertas circunstancias— se imponga la necesidad de pronunciarse de fondo por la proyección que pueda tener un asunto, en virtud de lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, o por la necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la misma situación o que requieran de especial protección constitucional.

Por su parte, el hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional.

En este supuesto, no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”.

Precisamente, en la Sentencia T-045 de 2008, se establecieron los siguientes criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de uno de tales hechos, a saber:

“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.”

Vistas las anteriores consideraciones, es evidente que en el asunto en estudio se presente la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que la entidad accionada, dio respuesta al derecho de petición, presentado por el accionante el día veintiséis (26) de mayo de 2022, de ahí que la acción de tutela pierda su razón de ser en este caso concreto, pues la orden que pudiera impartir el juez de tutela no tendría ningún efecto práctico al haberse superado la situación de hecho que produjo que la tutelante, incoara el resguardo constitucional, es decir, el motivo que generó la acción ya desapareció. Por lo tanto, se negará la presente acción por ser un hecho superado.



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
JUZGADO 2° DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
CRA 12 N° 15-20 EDIFICIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, PISO 3
VALLEDUPAR - CESAR
Tel: 5801739



En mérito de lo expuesto el Juzgado Segundo De Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Valledupar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR, la presente acción de tutela instaurada por **JORGE ENRIQUE CHOPERENA TORRES**, contra **SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTIN** por tratarse de un **HECHO SUPERADO**.

SEGUNDO: Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama).

TERCERO: En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

El Juez,


JOSSUE ABDON SIERRA GARCÉS
JUEZ



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
JUZGADO 2° DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
CRA 12 N° 15-20 EDIFICIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, PISO 3
VALLEDUPAR - CESAR
Tel: 5801739



Valledupar, Veintiuno (21) de septiembre del año dos mil Veintidós (2022).

Oficio No. 3074

Señor(a):

JORGE ENRIQUE CHOPERENA TORRES

Correo electrónico:

Referencia: ACCION DE TUTELA.

Accionante: JORGE ENRIQUE CHOPERENA TORRES

Accionado: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTIN CODAZZI

Rad. 20001-41-89-002-2022-00622-00

Providencia: FALLO DE TUTELA

NOTIFICAR FALLO DE TUTELA DE FECHA VEINTIUNO (21) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) QUE EN PARTE RESOLUTIVA DICE: **PRIMERO: NEGAR**, la presente acción de tutela instaurada por **JORGE ENRIQUE CHOPERENA TORRES**, contra **SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTIN** por tratarse de un **HECHO SUPERADO**. **SEGUNDO:** Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama). **TERCERO:** En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. El Juez. *fdo.* **JOSSUE ABDON SIERRA GARCES**.

Atentamente,

ESTEFANIA VILLAMIZAR LARRAZABAL
Secretaria



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
JUZGADO 2° DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
CRA 12 N° 15-20 EDIFICIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, PISO 3
VALLEDUPAR - CESAR
Tel: 5801739



Valledupar, Veintiuno (21) de septiembre del año dos mil Veintidós (2022).

Oficio No. 3075

Señor(a):

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTIN

Correo electrónico:

Referencia: ACCION DE TUTELA.

Accionante: JORGE ENRIQUE CHOPERENA TORRES

Accionado: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTIN CODAZZI

Rad. 20001-41-89-002-2022-00622-00

Providencia: FALLO DE TUTELA

NOTIFICAR FALLO DE TUTELA DE FECHA VEINTIUNO (21) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) QUE EN PARTE RESOLUTIVA DICE: **PRIMERO: NEGAR**, la presente acción de tutela instaurada por **JORGE ENRIQUE CHOPERENA TORRES**, contra **SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTIN** por tratarse de un **HECHO SUPERADO**. **SEGUNDO:** Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama). **TERCERO:** En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. El Juez. *fd.* **JOSSUE ABDON SIERRA GARCES**.

Atentamente,

ESTEFANIA VILLAMIZAR LARRAZABAL
Secretaria